

EL CASO GARCIA VALDES

Es sabido por la prensa que el abogado don Carlos García Valdés, actuando ante el Tribunal de Orden Público, se consideró en la obligación moral y profesional de hacer preguntas sobre malos tratos a un detenido, denunciados por éste, y que estas preguntas fueron sistemáticamente declaradas improcedentes por el presidente del tribunal. Es también sabido que el mismo presidente le retiró la palabra durante su informe y que, deducido testimonio de los términos que se consideraron delictivos, el Juzgado de Orden Público procesó a don Carlos García Valdés por los presuntos delitos de ultrajes a la nación



española y desacato. También es público que el letrado defensor don José María Gil-Robles y Quiñones dirigió la recusación contra los magistrados del tribunal que formaron sala el día del que trae causa su procesamiento, por considerar que tenían interés directo en el asunto y que no podían ser al tiempo jueces y ofendidos. Y es, por fin, público y sabido que esa recusación no prosperó.

Así están las cosas y, por tanto, pendiente del juicio oral el señor García Valdés ante el Tribunal de Orden Público, cuando en su otra actividad, que comparte con la de abogado, en la de profesor de Derecho penal con el doctor Enrique Gimbernát en la Universidad Complutense, se encuentra con una propuesta no admitida hasta

Para completar el panorama informativo hay que decir que el profesor García Valdés ya lo fue el año pasado en la misma Facultad de Derecho, y con gran aprovechamiento y aceptación por parte de los alumnos y de su titular el ya citado profesor Gimbernát. Nótese que el procesamiento narrado al principio tiene una antigüedad de varios meses —que no es cosa de hoy— y que se produjo en el curso pasado cuando ya era García Valdés profesor.

Naturalmente, esta negativa a prorrogar la condición de profesor no es única y se están teniendo noticias de otras en diversas universidades, sin que hasta ahora, al menos a nuestro conocimiento, se haya dado por la Administración —Rectorados o Ministerio— ninguna razón o explicación de su conducta. Parece como si en esos ámbitos, donde, por otra parte, tan competentes juristas hay en puestos claves, se considerase que los contratos del profesorado están en el ámbito de la más absoluta autonomía de la voluntad, como en los viejos tiempos en que el contrato de trabajo era un contrato civil de arrendamiento de servicios, partiendo de la ficción —por emplear un término suave— de que las dos partes —patrón y obrero— eran igualmente libres. Hoy, aquí y ahora, se hace lo mismo con el profesorado universitario contratado, y se retrocede a los peores tiempos del liberalismo económico, y además sin las defensas de clase —asociación o reunión— que entonces eran posibles. ¿Se puede sostener esa ficción? ¿No supone una desviación de poder que desconoce los derechos como trabajadores, conseguidos en otros campos, sobre todo el de la estabilidad en el empleo?

Sin embargo, el caso García Valdés tiene una peculiaridad en relación con otros casos. Parece que hay una razón, y ésta es el procesamiento. Si eso, como parece, es así, a los comentarios genéricos ya realizados habrá que añadir uno específico.

En primer lugar, es evidente que el presunto delito cometido por García Valdés no es de los infamantes ni de los llamados delitos naturales, sino que es un delito artificial o político, que, entre otras cosas, hubiera sido de cumplimiento imposible si el

Tribunal de Orden Público hubiese desaparecido, como reiteradamente vienen pidiendo corporativamente los abogados. No es un delito de carácter económico, de esos que producen cuantiosas pérdidas al país, ni tampoco de esos que producen muertes y daños por olvido o desconocimiento de las más elementales normas de prudencia reglamentaria. Es un delito que no lo sería en muchos países.

A lo anterior hay que añadir, en segundo lugar, que al tomar en cuenta, en perjuicio de García Valdés, el procesamiento se viola el principio de presunción de inocencia —nadie es culpable hasta que no ha sido condenado por sentencia firme por el tribunal competente—. Este principio está reconocido en el artículo 11, párrafo primero, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que dice:

«Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.»

Este principio se repite en el artículo 14, párrafo 2.º, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966.

A nivel europeo, la Convención de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa lo recoge asimismo en su artículo 6, número 2, al decir:

«Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente establecida.»

Aunque de una manera no tan clara y de forma indirecta, se establecerá también en el propio Fuero de los Españoles, artículo 19.

El principio de presunción de inocencia es una de las grandes conquistas de nuestro sistema cultural frente a la opresión y

a la arbitrariedad del Estado absoluto; es un bien preciadísimo al que no se puede renunciar. El caso García Valdés supone una transgresión flagrante, y si en la vida nacional no se obtiene reparación, habrá que seguir el camino de recurso individual abierto por la resolución 1.503 del Consejo Económico Social de las Naciones Unidas y completada por la resolución adoptada en 14 de mayo de 1971 por la subcomisión de lucha contra las medidas discriminatorias y de protección de las minorías. Es decir, es un caso tan grave y tan sintomático que merecerá la pena iniciar con él el recurso ante las Naciones Unidas.

G. P.-B. M.